



## RAMA JUDICIAL DEL PODER PÚBLICO

### TRIBUNAL SUPERIOR DE MEDELLÍN

### SALA SEXTA DE DECISIÓN LABORAL

Medellín, veintitrés (23) de febrero de dos mil veinticuatro (2024)

PROCESO: ORDINARIO LABORAL PRIMERA INSTANCIA  
DEMANDANTE: PABLO EMILIO LOPEZ LOPEZ  
DEMANDADO: COLPENSIONES  
RADICADO: 050013105 – 020-2020-00226-01  
ACTA N°: 10

En la fecha indicada, la Sala Sexta de Decisión Laboral, conformada por los Magistrados **ANA MARÍA ZAPATA PÉREZ, JUAN DAVID GUERRA TRESPALACIOS** y **MARÍA PATRICIA YEPES GARCÍA**, se constituyó en audiencia pública en el proceso de trámite ordinario laboral de primera instancia promovido por **PABLO EMILIO LOPEZ LOPEZ** para pronunciarse en virtud de los recursos de apelación de ambas partes así como en grado jurisdiccional de consulta a favor de COLPENSIONES, frente a la sentencia con la cual el Juzgado Veinte Laboral del Circuito de Medellín finalizó la primera instancia.

La Magistrada del conocimiento, doctora Ana María Zapata Pérez, declaró abierta la audiencia. A continuación, la Sala, previa deliberación sobre el asunto, como consta en el **acta 10** de discusión de proyectos, adoptó el presentado por la ponente, el cual quedó consignado en los siguientes términos:

#### 1. ANTECEDENTES

##### 1.1. LA DEMANDA<sup>1</sup>

Se pretende de manera concreta se DECLARE que COLPENSIONES al negar la pensión de vejez al demandante en los años 2013 y 2015 lo indujo en error, teniendo causado el derecho desde 2005, para que se condene al retroactivo desde la fecha en que solicitó por primera vez la prestación económica, intereses moratorios reglados en el artículo 141 de la ley 100 de 1993 o en subsidio indexación.

---

<sup>1</sup> Carpeta 01PrimeraInstancia/ 02DemandaAnexos. Pág. 4-6

Para sustentar sus pretensiones, afirmó, en síntesis: **i)** El señor PABLO EMILIO LOPEZ LOPEZ nació el 13 de septiembre de 1945, al 1 de abril de 1994 tenía más de 40 años, cumplió 60 años el 3 de septiembre de 2005 y tenía 500 semanas en los 20 años anteriores al cumplimiento de la edad en los términos del Decreto 758 de 1990. **ii)** En el año 2013 el demandante solicitó la prestación económica a la entidad, que fue negada con resolución GNR 286970 de 2013, volvió a solicitar en el año 2015 siendo negada con resolución GNR 393282 de 2015. **ii)** En el hecho SEPTIMO afirma que en la historia laboral presenta inconsistencias que muestra de manera detallada en varios ciclos entre agosto de 1998 y febrero de 2003, y que si hubieran sido corregidas por la entidad se hubiera pensionado para la primera solicitud de la prestación. Dice que el empleador URBANIZACIÓN VILLAS DE ARAGON estaba en mora en aportes pensionales, pagó otros de manera extemporánea y COLPENSIONES no realizó los cobros pertinentes, incumpliendo su obligación. **iii)** Dice que los aportes realizados por el actor después del 2005 no lo beneficiaron porque la prestación siempre será del salario mínimo y que el 16 de julio de 2020 solicitó nuevamente la prestación que fue reconocida por la entidad mediante la Resolución SU160210 de 2020 donde se reconoce el status desde el año 2005 con régimen de transición, lo que se traduce en que la entidad lo indujo en error.

## 1.2. LA CONTESTACIÓN DE COLPENSIONES<sup>2</sup>

La entidad contestó oportunamente y se opuso a todas y cada una de las pretensiones contenidas en el libelo petitorio de la demanda por carecer de fundamentación legal y fáctica. Propuso como excepciones de fondo las siguientes: INEXISTENCIA DE LA OBLIGACIÓN, INEXISTENCIA DE LA OBLIGACIÓN DE PAGAR INTERESES MORATORIOS, BUENA FE DE COLPENSIONES, PRESCRIPCIÓN, EXCEPCIÓN INNOMINADA, COMPENSACIÓN, IMPOSIBILIDAD DE CONDENA EN COSTAS.

## 2. LA SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA<sup>3</sup>

Mediante sentencia del **06 de agosto de 2021** la JUEZ VEINTE LABORAL DEL CIRCUITO DE MEDELLÍN, adoptó las siguientes decisiones<sup>4</sup>: **i)** DECLARÓ que el señor PABLO EMILIO LOPEZ LOPEZ es acreedor del reconocimiento de pensión de vejez a partir **del 03 de septiembre del año 2005**, fecha para la cual COLPENSIONES declaró que adquiriría su estatus de pensionado, pero por el fenómeno prescriptivo se reconoce el retroactivo pensional desde el **10 de agosto del año 2017 al 30 de julio del año 2020** por la suma de \$35.078.396. **ii)** CONDENÓ a COLPENSIONES a pagar los intereses moratorios consagrados en el art 141 de la ley 100 de 1993 **a partir del 10 de agosto del 2017** y hasta

<sup>2</sup> Carpeta 01PrimeraInstancia/ 09ContestacionColpensiones. Pág. 1-11

<sup>3</sup> Carpeta 01PrimeraInstancia/ 19AudienciaCompleta

<sup>4</sup> Carpeta 01PrimeraInstancia/ 19AudienciaCompleta. Min 01:12:34 - 01:14:37

la fecha en que se haga efectivo el pago del retroactivo. **iv)** ABSOLVIÓ a COLPENSIONES de la indexación y DECLARÓ parcialmente probada la excepción de prescripción de las mesadas pensionales causadas con anterioridad al 10 de agosto de 2017. **v)** CONDENÓ en costas a la entidad.

Para tomar estas decisiones, razonó básicamente de este modo: i) En primer lugar, en relación con la pretensión de retroactivo pensional luego de valorar el acervo probatorio y de manera concreta, la prueba obrante en la carpeta administrativa, señaló que el demandante solicitó la pensión de vejez a COLPENSIONES en varias oportunidades, generando los siguientes actos administrativos: **Resolución 019360 de 2006, GNR 286970 del 30 de octubre de 2013, GNR 393282 del 4 de diciembre de 2015 y SUB 16210 del 27 de julio del 2020**. Resaltó que radicó demanda el 25 de abril de 2014 solicitando el reconocimiento de la pensión de vejez, proceso que se tramitó ante el Juzgado 15 Laboral del Circuito de Medellín y que regresó en el mes de Junio de 2014 del Tribunal con **sentencia absolutoria** de la que se **desconoce** el contenido. Y a partir de la información de la historia laboral y de una respuesta de **COLPENSIONES del 28 de julio de 2020** dirigida al apoderado del demandante, se pronunció en relación con las inconsistencias y períodos en mora definidos en el **hecho séptimo** de la demanda. Así, luego de invocar los **artículos 23 y 24** de la **Ley 100** señaló que COLPENSIONES negó la pensión en el pasado bajo el argumento de que había un empleador moroso - Villas de Aragón- estando en discusión aportes en los años **1998, 1999, 2001 y 2002** con quien se encontraba vinculado laboralmente desde el **1 de enero de 1996** y hasta el **31 de agosto de 2003**, afirmando que la imputación de pagos que realiza la entidad o la omisión en el cobro de los aportes no se puede descargar en los afiliados que han efectuado los esfuerzos para prestar sus servicios confiando en que el empleador está realizando los pagos. Y concluye entonces, que *“el demandante tuvo que seguir trabajando y cotizando y continuó haciendo cotizaciones hasta el mes de agosto de 2020; se debe tener en cuenta que el señor pablo Emilio siguió haciendo sus aportes, pero debido al error que lo hizo incurrir COLPENSIONES”*. **ii)** Si bien encontró acreditada la causación del derecho desde el año 2005 declaró probada la prescripción de las mesadas causadas antes del 10 de agosto de 2017, porque encontró que la Resolución 019360 de 2006 no fue discutida. Y respecto a la Resolución GNR 286970 del 25 de abril de 2013 señala que es justamente en este momento que interpone la demanda ordinaria laboral el 22 de enero de 2014, señalando que a partir del 4 de agosto de ese año en que se archiva el proceso se reanudan los términos, reclamando el día 4 de diciembre de 2015 lo que genera la Resolución GNR 393282 de 2015. Y después de ello, solo cinco años después vuelve a reclamar **el 10 de agosto de 2020**, prescribiendo las mesadas causadas antes del **10 de agosto del año 2017**. **iii)** La condena por **\$35.78.396 por el retroactivo** de mesadas entre **10 de agosto del año 2017** y julio de 2020, la obtiene

a partir de una mesada inicial para el año 2017 **de 815.656 y con 14 mesadas anuales por el estatus** se consagró desde el **3 de septiembre de 2005** y la mesada pensional no excede 3 salarios mínimos legales vigentes. Nada se indicó en la providencia en relación con los descuentos en salud. **iv)** Condenó intereses moratorios como resarcimiento a toda la tardanza irracional que ha tenido COLPENSIONES con el demandante que ha sido solicitado la pensión desde el **año 2006**, pero señaló que por efectos de prescripción se deben reconocer desde el **10 de agosto de 2017**.

### 3. RECURSOS DE APELACIÓN

#### 3.1. DEMANDANTE<sup>5</sup>

El apoderado plantea su inconformidad en relación con la declaratoria de prescripción de mesadas, señalando lo siguiente: **i)** De acuerdo con el análisis efectuado en la providencia, el demandante **fue inducido en error desde el año 2006** en el que ya tenía causado el derecho, y revestido del principio de buena fe y confianza legítima continuó realizando aportes. No encuentra la razón de ser de la decisión absolutoria en las dos instancias del proceso ordinario laboral que se tramitó ante el Juzgado 15 Laboral del Circuito porque de acuerdo con la historia laboral estaba acreditada la mora del empleador en los aportes. **ii)** Dice que según la comunicación de COLPENSIONES del **año 2020** el empleador efectuó pagos de manera extemporánea sin embargo certifica en el acto administrativo que el status de pensionado es desde el año 2005, para resaltar que se trata de un **hecho nuevo** que la demandada está reconociendo ante el pago efectuado por el empleador. **iii)** Expresa así, que **en relación con esas mesadas anteriores desde el año 2005 no hay cosa juzgada**, porque tal como lo expuso la entidad **fue un hecho nuevo**, fue algo extemporáneo del empleador por el incumplimiento de la entidad demandada que tenía la obligación legal de realizar el cobro coactivo. Invoca la sentencia T-461 del 2019. **iv)** Insiste en que se encuentra revestido de buena fe y del principio de confianza legítima por la información que la entidad y la administración de justicia le suministraron, y como la prescripción exige un descuido del acreedor en este caso no es posible declararla, debiéndose modificar la sentencia para efectuar la condena desde que se expide la **Resolución 019360 de 2006**, destacando que no se puede premiar a la demandada por su actuar negligente en relación con el cobro de los aportes. **v)** En consecuencia, solicita se modifique la fecha de causación de intereses moratorios.

#### 3.2. COLPENSIONES<sup>6</sup>

<sup>5</sup> Carpeta 01PrimeraInstancia/ 19AudienciaCompleta. Min: 01:15:05 – 01:21:46

<sup>6</sup> Carpeta 01PrimeraInstancia/ 19AudienciaCompleta. Min: 01:22:00 – 01:25:38

Solicita la revocatoria de la sentencia, con los siguientes planteamientos: **i)** Ya se determinó por la justicia ordinaria al absolver del reconocimiento pensional, que el demandante **no había causado el derecho para los años 2005 ni 2013** porque no contaba con el número de semanas exigidas en la Ley, por lo que **no se puede afirmar que la entidad hubiese generado un engaño** hacia el demandante. Posteriormente acaecieron **nuevos hechos** que permitieron el reconocimiento pensional en el **año 2020** por el pago de los **periodos en mora** del empleador, siendo la entidad un tercero de buena fe que se encarga de las cotizaciones. El pago se concretó mucho tiempo después de la primera solicitud de pensión y de que se adelantara el proceso judicial, razón por lo cual no puede condenarse al retroactivo pensional. **ii)** En caso de que se confirme la condena al retroactivo, solicita se **revoque el reconocimiento de intereses moratorios**: Invoca la sentencia SL 5541 de 2018 para señalar que en las situaciones que en que el reconocimiento pensional se basa en cotizaciones en mora que no habían sido canceladas por el empleador no hay lugar a intereses, porque si COLPENSIONES no otorgo la pensión en el pasado no se debió a un obrar de mala fe o en contra de derecho

#### **4. TRÁMITE, COMPETENCIA Y DETERMINACIÓN DE LOS PROBLEMAS JURÍDICOS EN LA SEGUNDA INSTANCIA**

Habiéndose corrido traslado para formular alegatos de conclusión en esta instancia<sup>7</sup>, ambas partes intervienen:

**La activa** insiste en los argumentos del recurso, pues respecto al retroactivo dice que COLPENSIONES **por más de 14 años indujo en error al actor** e inclusive la justicia ordinaria, señalando respecto al proceso con radicado 05001 31 05 0152014 00071 00 en el que se profirió decisión absolutoria expresando “que a la fecha como apoderado sigo sin entender, del porque (sic) cuando en la historia laboral saltaba a la vista la mora patronal”. Dice que tantos errores de la entidad no pueden ser cargados al actor quien ha sido diligente en su actuar confiando en una administradora negligente y descuidada. Así resalta que, de acuerdo a la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia al estudiar el fenómeno de la prescripción, la prestación económica se debe reconocer **desde el momento que el actor tenía derecho**, *“en este caso desde el año 2005 calenda para la cual el actor tenía 500 semanas cotizadas en los últimos 20 años, o 2006, momento en que la entidad expide el primer acto administrativo”* - **SL2453-2021**. Y que se debe modificar la sentencia respecto a los intereses moratorios, transcribiendo apartes de la sentencia con Radicación No. 43781 del 14 de agosto de 2013. Anexa Resolución del 2006, que fue aportada por COLPENSIONES en el expediente administrativo.

<sup>7</sup> Numeral 1 del artículo 13 de la ley 2213 de 2022/ 17. 013 2020 00048 Auto admite y corre traslado.

El apoderado de COLPENSIONES reitera la solicitud de revocatoria de la sentencia de primera instancia planteando, en síntesis: **i)** No procede el derecho al retroactivo pensional pues al observar la historia laboral su última cotización se realizó en el periodo de **agosto de 2020**, momento desde el cual debe ser reconocido su derecho de acuerdo con los artículos 13 y 35 del Decreto 758 de 1990, Sentencia T-626 de 2014 y Sentencia SL1960-2021. **ii)** Invoca los artículos 22 y 23 del Código Sustantivo de Trabajo, para señalar que para efectos de imponer la liquidación de cálculo actuarial a la administradora pensional se requiere que la relación laboral quede plenamente determinada, situación que no se encuentra acreditada en el caso concreto. Y Colpensiones carece de legitimación en la causa por pues las pretensiones invocadas nacen a partir de un contrato de trabajo del cual no hizo parte, además de ser la consecuencia de un supuesto incumplimiento del empleador de las obligaciones que respecto a su empleado siendo su responsabilidad exclusiva realizar los pagos en mora. Se evidencia en la historia laboral del accionante que los periodos acusados de no haber sido corregidos por la Entidad fueron cotizados años después de la omisión del empleador, quien no afilió a su empleado y en consecuencia no realizó los pagos a la seguridad social, lo que impide a la Entidad adelantar acciones de cobro en contra del empleador moroso. **iii)** Y reitera que se absolvió a COLPENSIONES en sentencia emitida al interior del proceso con radicado 05001310501520140007100, constituyéndose así la **cosa juzgada** en el asunto fuente del litigio.

Con providencia del pasado **18 de mayo** se decretó prueba de oficio<sup>8</sup>, allegando el expediente del proceso con radicado 05001310501520140007100 del que se corrió traslado a las partes<sup>9</sup>.

Pues bien, la Sala es competente para conocer del proceso en virtud de los recursos de las partes y en el **grado jurisdiccional de consulta** a favor de COLPENSIONES, debiéndose definir básicamente lo siguiente: i) A partir de la prueba decretada en esta instancia se efectuarás el análisis del acervo probatorio con el fin de determinar si efectivamente se acredita la existencia de COSA JUZGADA en relación con el proceso identificado con radicado 05001310501520140007100 como propone COLPENSIONES para solicitar la revocatoria de la sentencia y si se acreditan los presupuestos para afirmar que, con la negativa del reconocimiento de la pensión de vejez al señor **PABLO EMILIO LOPEZ** se le indujo al error de continuar cotizando innecesariamente, afectando de este modo el derecho al retroactivo de la pensión de vejez que sólo fue reconocida a partir del **1 de**

<sup>8</sup> SEGUNDA INSTANCIA – archivo 14

<sup>9</sup> SEGUNDA INSTANCIA – archivos 15 a 19



**agosto de 2020.** ii) En caso de encontrarse acreditado el derecho a un retroactivo pensional, se analizará si resulta procedente la condena a intereses moratorios consagrados en el artículo 141 de la Ley 100 por el retardo en el pago de las mesadas pensionales que lo integran o en subsidio, la indexación.

##### **5. EN ESTE PROCESO SÍ SE ACREDITA QUE COLPENSIONES INDUJO AL SEÑOR PABLO EMILIO LOPEZ AL ERROR DE SEGUIR COTIZANDO– SE CAUSA EL DERECHO A UN RETROACTIVO PENSIONAL**

El acervo probatorio recaudado en este proceso, muestra en relación con el reconocimiento del derecho pensional del demandante, lo siguiente:


- El señor PABLO EMILIO LOPEZ nació el día **3 de septiembre de 1945**<sup>10</sup> y fue afiliado al I.S.S. desde el **17 de abril de 1975** efectuando cotizaciones a través de múltiples empleadores<sup>11</sup>.
- El 20 de julio de 2006 solicitó por primera vez al I.S.S. el reconocimiento de la pensión de vejez<sup>12</sup> pero fue negada mediante **Resolución 019360 de ese año 2006** por no acreditar los requisitos consagrados en el artículo 12 del Decreto 758 de 1990 porque sólo acreditaba **476 semanas** en los **20 años anteriores a la mínima requerida**<sup>13</sup>.
- El afiliado continuó cotizando y el 25 de abril de 2013 solicitó la pensión de vejez por segunda vez, en esta oportunidad a COLPENSIONES<sup>14</sup>, emitiéndose la **Resolución GNR 286970 del 30 de octubre de 2013** con la que nuevamente se deniega la prestación. En esta oportunidad se informa que sólo cuenta con un total de 832 semanas cotizadas<sup>15</sup>
- Es así como el señor PABLO EMILIO LOPEZ el **21 de enero de 2014** instaura Proceso Ordinario Laboral que se tramitó bajo el Radicado 05001310501520140007100<sup>16</sup>. Se observa que fue pretensión del proceso el reconocimiento de la pensión de vejez como beneficiario del régimen de transición consagrado en el artículo 36 de la Ley 100 en concordancia con el Decreto 758 de 1990. Se afirmó la existencia de unos períodos en mora con el empleador EDIFICIO BELVEDERE entre agosto de 1995 y el 30 de septiembre de 1999 equivalente a **214.28** semanas y con el empleador URBANIZACION VILLAS DE ARAGÓN por los ciclos septiembre y noviembre de 2001, febrero de 2002, marzo y mayo de 2003 por **21.42** semanas, así como unas inconsistencias por los ciclos enero a abril de 2009 equivalentes a **17.14** semanas. La

<sup>10</sup> PRIMERA INSTANCIA – archivo 2 – página 18

<sup>11</sup> PRIMERA INSTANCIA – archivo 2 – página 31

<sup>12</sup> PRIMERA INSTANCIA – archivo 16 |  GRP-HPE-EV-CC-6637160.pdf - Adobe Reader

<sup>13</sup> Carpeta 01PrimerInstancia/ 16CC-6637160/ GRP-HPE-EV-CC-6637160. Pág. 2

<sup>14</sup> PRIMERA INSTANCIA – archivo 16 |  2013\_2776228\_GRP-FSP-AF.pdf - Adobe Reader

<sup>15</sup> PRIMERA INSTANCIA – archivo 02 Pág. 74

<sup>16</sup> SEGUNDA INSTANCIA – subcarpeta 16

tesis del demandante en aquel proceso, esbozada por su apoderado en las alegaciones en primera instancia así como en el recurso de apelación interpuesto contra la sentencia absolutoria adoptada por la Juez Quince Laboral del Circuito de Medellín era que, al sumar los períodos en mora (235 semanas) a las semanas cotizadas (354) superaba el requisito de 500 semanas en los en los 20 años anteriores a la fecha en que cumplió los 60 años de edad: 13 de septiembre de 2005.

La tesis no fue acogida en segunda instancia, por lo que con sentencia del 20 de mayo de 2014 proferida por una de las Salas de Decisión de este Tribunal se decidió CONFIRMAR la sentencia absolutoria. Se concluyó básicamente que el demandante no logró colmar las 500 semanas dentro de los últimos 20 años al cumplimiento de la edad, esto es entre el 03 de septiembre de 1985 y el mismo día y mes de 2005, toda vez que sólo contabilizó 489 semanas, dentro de las cuales se sumaron los periodos de julio de 1995 a septiembre de 1999, septiembre y noviembre de 2001, febrero de 2002 y marzo y mayo de 2003.

- Es así como el señor PABLO EMILIO LOPEZ continuó efectuando cotizaciones al Sistema General de Pensiones, y el **26 de mayo de 2015** el empleador URBANIZACIÓN VILLAS DE ARAGÓN realiza el pago de varios ciclos adeudados:

<u>año</u>	<u>ciclos</u>
<b>2001</b>	septiembre y noviembre
<b>2002</b>	febrero, marzo y agosto
<b>2003</b>	marzo, mayo, junio, julio y agosto

- Ahora bien, con posterioridad a estos pagos realizados por el empleador URBANIZACIÓN VILLAS DE ARAGÓN, el señor PABLO EMILIO LOPEZ solicita por **tercera vez** la pensión de vejez<sup>17</sup> y el **11 de diciembre de 2015** se notifica de la **Resolución GNR 393282 del 4 de diciembre 2015**, acto administrativo en el que nuevamente se niega el reconocimiento de la prestación, presentando como argumentos<sup>18</sup>: i) Que solo acredita un total de 1.007 semanas entre el 17 de abril de 1975 y octubre de 2015; ii) Que solo contaba con 491,31 semanas al 25 de julio de 2005, por lo que en su caso no extiende el régimen de transición hasta diciembre del 2014 en los términos del parágrafo 4 transitorio del AL 1 de 2005; iii) Que no cumplía con la densidad mínima de semanas consagrada en el artículo 9 de la Ley 797 de 2003.

Esta corporación observa que, a pesar de que el empleador URBANIZACIÓN VILLAS DE ARAGÓN había efectuado el pago de los períodos anteriormente referidos, en el

<sup>17</sup> PRIMERA INSTANCIA – carpeta 16 -  GRP-FSP-AF-2015\_7328557-20150812135522.pdf - Adobe Reader

<sup>18</sup> PRIMERA INSTANCIA – archivo 02 - Página 74



acto administrativo emitido por COLPENSIONES solo se tuvieron en cuenta los siguientes:

<u>año</u>	<u>ciclos</u>
2001	septiembre y noviembre
2002	febrero y agosto
2003	marzo

Se verifica entonces que, si bien para el momento en que se emite el acto administrativo el empleador URBANIZACIÓN VILLAS DE ARAGÓN había efectuado aportes por **10** períodos, que equivalen a **42.85** semanas, con los que acreditaba el requisito de 500 semanas en los 20 años anteriores al cumplimiento de los 60 años de edad; el haber omitido la inclusión de **5** períodos que equivalen a **21.42** semanas generó la negativa al reconocimiento de la prestación. Se observa así, que con este acto administrativo la entidad sí indujo al accionante a seguir efectuando cotizaciones, indicándole expresamente que podía continuar cotizando o solicitar la indemnización sustitutiva:

**Se le informa al señor LOPEZ LOPEZ PABLO EMILIO, podrá continuar cotizando para completar los requisitos exigidos en la Ley para acceder a la pensión de vejez (Artículo 33 de la Ley 100 de 1993, modificado por el Artículo 9 de la Ley 797 de 2003) o en su defecto, solicitar la indemnización sustitutiva prevista en el artículo 37 de la Ley 100 de 1993, previa manifestación de la imposibilidad de continuar cotizando al Sistema.**

De hecho, habiéndose ya realizado el pago los 10 ciclos antes referidos por el empleador, se le indica que puede radicar solicitud de corrección de historia laboral:

**En cuanto a la normatividad anterior y revisado el aplicativo de Historia Laboral se evidencia que el señor LOPEZ LOPEZ PABLO EMILIO ya identificado, solo cotizaciones al Sistema por el tiempo relacionada en la historia laboral anteriormente citada por consiguiente es necesario indicar al solicitante que para solicitar la inclusión o corrección de inconsistencias en su historia Laboral, debe diligenciar y radicar en cualquiera de nuestros Puntos de Atención, los Formularios de Solicitud de Corrección de Historia laboral.**

- Es así entonces cómo el demandante continúa cotizando a través del empleador UNO A ASEO INTEGRADO S.A. y el **6 de julio de 2020** el empleador URBANIZACIÓN VILLAS DE ARAGÓN realiza el pago de **3** ciclos adicionales<sup>19</sup>:

<b>Fecha de pago</b>	<b>Ciclo</b>	<b>página</b>
6 de julio de 2020	Octubre de 1998	65
6 de julio de 2020	Septiembre de 1998	66
6 de julio de 2020	Octubre de 1999	67

<sup>19</sup> Carpeta 01PrimerInstancia- archivo 02 – páginas 47 a 60 y 65 a 67

Y con posterioridad a ello, el señor PABLO EMILIO LOPEZ solicita el **16 de julio de 2020** por cuarta vez la pensión de vejez, emitiéndose en esta oportunidad por COLPENSIONES la **Resolución SUB 1602010 del 27 de julio de 2020**, acto administrativo en el que se reconoce un total de **1254 semanas**. El derecho pensional se otorga como beneficiario del régimen de transición consagrado en el **artículo 36 de la Ley 100** en concordancia con el **Decreto 758 de 1990**, definiendo como fecha de causación el **3 de septiembre de 2005**, cuando arribó a los **60 años de edad** y una tasa del **90%**. Pero el retroactivo se concede a partir del **1 de agosto de 2020**, verificándose que la novedad de retiro se materializó el **15 de agosto** de ese año<sup>20</sup>:

Nombre	Fecha Status	Fecha Efectividad	VALOR IBL 1	VALOR IBL 2	Mejor IBL	% IBL	Valor Pensión 2020
PENSION DE VEJEZ - Decreto 758 de 1990 - REGIMEN DE TRANSICION - HOMBRE	3 de septiembre de 2005	1 de agosto de 2020	\$963.110	\$979.199	2	90.00	\$881.279

- Finalmente el **28 de julio de 2020** con escrito identificado con **radicado 2020\_6634683**<sup>21</sup> se informa al actor que la razón para la que no se ha reconocido la pensión se sustenta en periodos laborados que no se reflejan en la Historia Laboral: i) Se indica que los ciclos 1998-08, 1998-09 y 2001-02 ya fueron incluidos. ii) Que los ciclos **2001-08, 2001-12, 2002-01, 2002-06, 2002-07 y 2002-12 al 2003-02** aún no han sido pagados.

Sorprende a la Sala esta respuesta con una información claramente contraria a la realidad, pudiéndose comprobar en la **Resolución SUB 1602010 del 27 de julio de 2020** que tales ciclos sí fueron pagados y tenidos en cuenta para el reconocimiento pensional.

Este recuento permite entonces a la Sala, llegar a las siguientes conclusiones:

**En primer lugar**, si bien el señor PABLO EMILIO LOPEZ en el año **2014** instauró un Proceso Ordinario Laboral buscando el reconocimiento de la pensión de vejez por considerar que acreditaba 500 semanas en los en los 20 años anteriores a la fecha en que cumplió los 60 años de edad el 13 de septiembre de 2005 solicitando la inclusión de unos períodos en mora, tesis que no fue acogida en ninguna de instancias; en criterio de esta corporación no se acreditan los presupuestos para afirmar la existencia de una COSA JUZGADA respecto a lo que es objeto de debate en este proceso. Esta figura se encuentra regulada por el art. 303 del CGP, cuyo tenor literal expresa:

**“La sentencia ejecutoriada proferida en proceso contencioso tiene fuerza de cosa juzgada siempre que el nuevo proceso verse sobre el mismo objeto, se funde en la**

<sup>20</sup> PRIMERA INSTANCIA – archivo 10  
<sup>21</sup> Carpeta 01PrimeraInstancia/02DemandaAnexos. Pág. 24-25

**misma causa que el anterior y entre ambos procesos haya identidad jurídica de partes”.**

Se entiende que hay identidad jurídica de partes cuando las del segundo proceso son sucesores por causa de muerte de las que figuraron en el primero o causahabientes suyos por acto entre vivos celebrado con posterioridad al registro de la demanda si se trata de derechos sujetos a registro, y al secuestro en los demás casos.

En los procesos en que se emplace a personas indeterminadas para que comparezcan como parte, incluidos los de filiación, la cosa juzgada surtirá efectos en relación con todas las comprendidas en el emplazamiento.

La cosa juzgada no se opone al recurso extraordinario de revisión”.

(Negrilla propia)

La finalidad de la cosa Juzgada consiste en imprimir fuerza vinculante a las sentencias, proteger su carácter definitivo e inmutable a fin de salvaguardar el orden social y la seguridad jurídica; de ahí que, de encontrarse configurados sus elementos de objeto, causa e identidad de partes<sup>22</sup>, ésta debe declararse y no podrán conocerse de fondo sobre las pretensiones planteadas en la demanda. Al respecto, advierte la H. Corte Constitucional en sentencia C-522 de 2009 que la cosa juzgada es:

Una cualidad inherente a las sentencias ejecutoriadas, por la cual aquéllas resultan inmutables, inimpugnables y obligatorias, lo que hace que el asunto sobre el cual ellas deciden no pueda volver a debatirse en el futuro, ni dentro del mismo proceso, ni dentro de otro entre las mismas partes y que persiga igual objeto”. Citándose, mencionó que “el fin primordial de este principio radica en impedir que la decisión en firme sea objeto de nueva revisión o debate, o de instancias adicionales a las ya cumplidas, o que se reabra el caso judicial dilucidado mediante el fallo que reviste ese carácter, con total independencia de su sentido y alcances, dotando de estabilidad y certeza las relaciones jurídicas y dejando espacio libre para que nuevos asuntos pasen a ser ventilados en los estrados judiciales<sup>23</sup>”

La Sala de Casación Laboral de Corte Suprema de Justicia, interpreta que “*para determinar si existe identidad de objeto, el juez debe estudiar si con su pronunciamiento contradice una decisión anterior, ya sea porque se concedió el derecho reclamado o bien porque se negó. Puestas, así las cosas, y demostrada la igualdad entre las partes en ambos procesos, es del caso verificar si los planteamientos y las pretensiones incoadas en las correspondientes actuaciones, comprenden objetos ya resueltos y en ese caso, no pueden ser objeto de nuevo pronunciamiento*”<sup>24</sup>.

A partir de los anteriores presupuestos jurídicos definidos en nuestro ordenamiento, no comparte entonces el planteamiento efectuado por COLPENSIONES en su recurso y en

<sup>22</sup> SL 1079 de 2022.

<sup>23</sup> C-543 de 1992.

<sup>24</sup> SL 4084 de 2019.

las alegaciones en esta instancia, pues se evidencia que lo que es materia de este proceso, en manera alguna lo fue en el proceso anterior tramitado entre las mismas partes ante el Juzgado Quince Laboral del Circuito de Medellín bajo el **Radicado 05001310501520140007100**, por la siguiente razón: En éste proceso no se discute el derecho a la pensión de vejez que en efecto ya fue reconocida al demandante con **Resolución SUB 1602010 del 27 de julio de 2020**, siendo **objeto** de debate el derecho a un retroactivo pensional. Y porque la **causa** de la pretensión también difiere, dado que con posterioridad a la finalización de aquel proceso el empleador URBANIZACIÓN VILLAS DE ARAGÓN efectuó el pago de **10 ciclos adeudados** en el **año 2015** y luego **3 ciclos** en el **año 2020**, lo que sin duda constituye una situación fáctica que no fue analizada en el proceso anterior.

En **segundo lugar**, se ha demostrado en este proceso que si bien con posterioridad al primero proceso laboral tramitado entre las partes el empleador URBANIZACIÓN VILLAS DE ARAGÓN efectuó el pago de 10 ciclos el **26 de mayo de 2015** suficientes para acreditar la causación del derecho pensional desde el **03 de septiembre de 2005**, debiendo reconocer la prestación en aquel entonces, COLPENSIONES con la **Resolución GNR 393282 del 4 de diciembre 2015** al negar de manera injustificada la prestación indujo al señor PABLO EMILIO LOPEZ a seguir cotizando afectando de este modo el derecho al retroactivo pensional, dado que la prestación debió ser reconocida desde aquel entonces.

Este error de la entidad en manera alguna puede afectar el derecho pensional del señor PABLO EMILIO LOPEZ conforme el reiterado precedente de la Sala Laboral de la Corte Suprema de Justicia referido a casos en los que la persona solicita el derecho pensional, y en virtud de la respuesta ofrecida por la entidad continúa efectuando cotizaciones que finalmente afectan el retroactivo pensional (**Del 6 de julio de 2011, rad. 38558; Del 15 mayo de 2012, rad. 37798; Del 11 de julio de 2018 - SL 2707-2018 -- SL 435-2021 - SL2453-2021 - SL4057-2022**). En la sentencia **SL163-2018** citada en la **SL 2061 – 2022** la Alta Corporación expresó

Ello, se ha establecido en casos en los que el demandante despliega alguna conducta tendiente a no continuar vinculado al sistema, como lo sería el cese de las cotizaciones (CSJ SL 35605, 20 oct. 2009; CSJ SL4611-2015), o cuando pese a no haber desafiliación del sistema, el juzgador advierte su voluntad de no seguir vinculado al régimen pensiones, por ejemplo, porque dejó de cotizar y solicitó la pensión de vejez (CSJ SL5603-2016); o en casos en que la entidad de seguridad social fue renuente al reconocimiento de la prestación a pesar de ser solicitada en tiempo y con el lleno de los requisitos (CSJ SL 34514, 1.º sep. 2009; CSJ SL 39391, 22 feb. 2011; CSJ SL15559-2017). En la sentencia CSJ SL5603-2016, la Corporación indicó lo siguiente:

Este ejercicio de búsqueda de soluciones proporcionales y coherentes valorativamente, no implica una transgresión a las reglas metodológicas de interpretación jurídica. Antes bien, parte del correcto entendimiento que la utilización de las reglas interpretativas excluye su aplicación aislada y descontextualizada de los elementos externos. Además, en el sistema

legal, la hermenéutica jurídica no se agota en la gramática o el análisis del lenguaje de los textos, pues existen otros métodos igualmente válidos que deben ser conjugados y armonizados para desentrañar el contenido de las disposiciones legales.

En este sentido, mal haría el juzgador, excusado en que la norma es «clara» y en la idea errada subyacente de la infalibilidad del legislador, llegar a soluciones abiertamente incompatibles y desalineadas frente a lo que constituye el marco axiológico del ordenamiento jurídico. Por esto, un adecuado ejercicio hermenéutico debe integrar las distintas reglas de interpretación y los factores relevantes de cada caso, en procura de ofrecer soluciones aceptables y satisfactorias.

Así las cosas, en el sub examine, el Tribunal no se equivocó al generar un espacio en favor de una lectura distinta a aquella según la cual el retiro formal del sistema es condición necesaria para el disfrute de la pensión. Su conducta, consistente en revisar las peculiaridades del caso sometido a su escrutinio, es en un todo aceptable, pues como en innumerables oportunidades lo ha reiterado esta Sala «si bien, los artículos 13 y 35 del Acuerdo 049 de 1990, aprobado por el Decreto 758 del mismo año, consagra necesaria la desafiliación del sistema para que pueda comenzarse a pagar la pensión de vejez, ante situaciones que presentan ciertas peculiaridades, como en este evento quedó demostrado, la aplicación de dichas normas debe ajustarse a las especiales circunstancias que emergen del plenario» (CSJ SL, 1º sep. 2009, rad. 34514, reiterada en CSJ SL, 22 feb. 2011, rad. 39391; CSJ SL, 6 jul. 2011, rad. 38558; CSJ SL, 15 may. 2012, rad. 37798).

Siendo, así las cosas, a juicio de esta Sala de Decisión el derecho al retroactivo pensional corresponde a partir del momento en que se generó la inducción a error, que lo fue el **11 de diciembre de 2015** fecha en que se notificó la **Resolución GNR 393282 del 4 de diciembre 2015**, debiendo concluirse que todas las cotizaciones realizadas con posterioridad **en manera alguna se efectuaron voluntariamente**. Por el contrario, se ha puesto en evidencia que habiéndose efectuado el pago de los aportes en mora por el empleador URBANIZACIÓN VILLAS DE ARAGÓN desde el **26 de mayo de 2015**, la entidad reiteró la negativa al reconocimiento pensional con un acto administrativo emitido **siete (7) meses después**, en el que efectuó el análisis del derecho teniendo en cuenta **solo cinco (5) ciclos de los diez (10)** que fueron efectivamente pagados por ese empleador para de ese modo desconocer la causación del derecho pensional, a pesar de que para ese momento se acreditaba con suficiencia el derecho por ser beneficiario del régimen de transición.

En **tercer lugar**, debe resaltarse que COLPENSIONES propuso la excepción de prescripción y en criterio de esta corporación en este caso no se acredita su procedencia, por lo siguiente:

Es claro que, de conformidad con los artículos **151 CPTSS, 488 y 489 CST**, los derechos de la seguridad social, prescriben en tres años, que se cuentan a partir del momento de su exigibilidad (**CSJ SL13155-2016, CSJ SL 1785-2018 y CSJ SL2885-2019**), de modo que quien exija un derecho deberá reclamarlo en el término establecido, en cuyo caso, para que por una sola vez se entienda interrumpido y comience a correr de nuevo por un lapso igual al inicialmente señalado, debe ser solicitado ante la entidad que lo adeuda.

En efecto, sobre la prescripción, en sentencia CSJ **SL5159-2020** enseñó:

La prescripción es un modo de adquirir cosas ajenas, o bien, de extinguir las acciones y derechos, por haberse poseído dichas cosas **o no haberse ejercido dichas acciones y derechos durante un lapso de tiempo determinado. Es decir, la prescripción extintiva se entiende como una forma de extinción o desaparición de un derecho, real o personal o de una acción, cuando durante un determinado período de tiempo establecido en la ley, no se realizan ciertos actos**, a lo que el ordenamiento le atribuye la consecuencia indicada (CSJ SL2501-2018).

Esta Sala de la Corte ha señalado que el fenómeno de la prescripción se justifica **por razones de orden práctico y que exigen que las relaciones jurídicas no permanezcan inciertas en el tiempo y se solucionen** (CSJ SL, 2 may. 2003, rad. 19854). En materia laboral, en la sentencia C-412-1997 la Corte Constitucional indicó que dicha institución jurídica tiene como finalidad *«el establecimiento de un término para el ejercicio de la acción laboral concurrente con la función del Estado de garantizar la vigencia y efectividad del principio de seguridad jurídica. Resulta entonces congruente con dicho principio, el imponer límite a la existencia de conflictos para que estos no perduren indefinidamente, siendo resueltos por medios pacíficos entre patronos y trabajadores»*.

Y también se ha decantado en la jurisprudencia de la Sala de Casación Laboral que si bien el derecho pensional no prescribe, lo contrario sucede con las mesadas porque al tratarse de importes que se hacen exigibles periódicamente, admiten prescripción trienal, cuyo cómputo corre de manera independiente para cada período, desde que se hace exigible la mensualidad; de manera que en aquellos **eventos en que se efectúan varias solicitudes**, para efectos de interrupción de la prescripción se tiene en cuenta la última, dado que el término extintivo opera de manera autónoma e independiente sobre las mesadas que se causan mes a mes, por tratarse de una prestación periódica (**SL794-2013, SL 4340 – 2019, SL1972-2021, SL2494-2021, SL2099-2022, SL867-2023**).

Pues bien, dadas las particularidades de este caso concreto, se advierte por esta corporación que al haber sido la decisión adoptada por COLPENSIONES en la **Resolución GNR 393282 del 4 de diciembre 2015** lo que generó que el demandante continuara a sus 70 años de edad trabajando y haciendo aportes durante cinco años más sin requerirlo, **en manera alguna se puede afirmar en su caso una conducta de abandono o desidia frente al derecho en controversia que evidencie desinterés en su reclamación**. Por el contrario, se exhibe de palmaria su incansable lucha para la obtención de la pensión de vejez que Colpensiones desafortunadamente negó en aquella oportunidad pese a que para ese momento PABLO EMILIO LOPEZ reunía con creces los requisitos contemplados en el **artículo 20 del Decreto 758 de 1990** aplicable en virtud del **artículo 36 de la Ley 100**.



Se trata entonces de un caso en el que la pasiva vulnera gravemente los derechos del afiliado; un caso en el que es manifiesta la desidia de la entidad en el trámite administrativo sin que exista justificación alguna, desconociendo el derecho a disfrutar al afiliado de su mesada pensional e imponiéndole continuar trabajando para poder seguir efectuando las cotizaciones conforme las directrices emitidas en tal acto administrativo. Tal conducta de la demandada, no solo es reprochable, sino que además demuestra el desinterés en otorgar la protección social al señor PABLO EMILIO LOPEZ, quien inducido en el error durante tantos años, finalmente decide reclamar su derecho **por cuarta vez** el **16 de julio de 2020** enterándose con la **Resolución SUB 1602010 del 27 de julio de 2020**<sup>25</sup> que efectivamente su derecho sí se había causado **quince (15) años** atrás desde el **3 de septiembre de 2005**: En otras palabras, mal puede exigirse al actor que acudiera a la jurisdicción a reclamar su derecho pensional, si la entidad le sugirió en el año 2015 que siguiera cotizando, como en efecto lo hizo.

Por el contrario, lo que se observa es que es sólo con la **Resolución SUB 1602010 del 27 de julio de 2020** se otorga certeza del grave error en el que incurrió con la respuesta negativa emitida el **4 de diciembre de 2015**. Así, al instaurarse el proceso en el **año 2020** una vez notificada esta Resolución con la que por fin se reconoció la pensión de vejez ya a sus 75 años de edad, sin duda ello ocurrió dentro del término consagrado en el **artículo 151 del Código Procesal del Trabajo**, por lo que en este aspecto se MODIFICARÁ la providencia que se revisa acogiendo el disenso esbozado por la activa en el recurso.

Se CONDENARÁ a COLPENSIONES a reconocer el **retroactivo** pensional a partir del **11 de diciembre de 2015** con **14 mesadas pensionales al año**, al haberse causado el derecho con antes al **31 de julio de 2011** en los términos del **AL 01 de 2005**.

Ahora, en relación con el valor a pagar, se advierte que la pensión se reconoció a partir del **1 de agosto de 2020** con una mesada por valor de **\$ 881.279**<sup>26</sup> y una vez efectuada la operación aritmética obtiene los siguientes valores para los años anteriores:

DEFLACTAR PENSIÓN		
Año	IPC	Valor Pensión
2015	6,77%	\$700.135
2016	5,75%	\$747.534
2017	4,09%	\$790.518
2018	3,18%	\$822.850
2019	3,80%	\$849.016
2020	1,61%	\$881.279

<sup>25</sup> PRIMERA INSTANCIA – archivo02 – **páginas 73 a 84**

<sup>26</sup> Carpeta 01PrimeraInstancia/02DemandaAnexos. Pág. 74-84

Y calculando el retroactivo causado entre el **11 de diciembre de 2015** y el **31 de julio de 2020** la Sala obtiene una suma de **CINCUENTA Y DOS MILLONES CUATROCIENTOS CINCUENTA Y UN MIL CIENTO CINCUENTA Y NUEVE PESOS (\$52.451.159)** conforme al siguiente detalle<sup>27</sup>:

RETROACTIVO PENSIONAL				
Año	IPC	# mesadas	Valor pensión	Total Retroactivo
2015	6,77%	0,66	\$700.135	\$462.089
2016	5,75%	14	\$747.534	\$10.465.478
2017	4,09%	14	\$790.517	\$11.067.243
2018	3,18%	14	\$822.850	\$11.519.893
2019	3,80%	14	\$849.016	\$11.886.226
2020	1,61%	8	\$ 881.279	\$7.050.230
TOTAL				<b>\$52.451.159</b>

La entidad descontará del valor del retroactivo los aportes en salud, los que, operan por mandato legal, sin necesidad de declaración judicial: **(SL 1169 de 2019 - SL 1540 de 2020)**

**6. INTERESES MORATORIOS**

En este proceso se ha CONDENADO a COLPENSIONES al pago de intereses moratorios sobre las mesadas que integran el retroactivo pensional objeto de condena.

Conforme lo definido en la sentencia **C-601 de 2000** y en la jurisprudencia de la Sala Laboral de la Corte Suprema de Justicia (**SL1681-2020 y SL 3130 – 2020**) la finalidad de los intereses moratorios previstos en el artículo 141 de la Ley 100 de 1993 es simplemente la de **resarcir los perjuicios ocasionados a los pensionados por la cancelación tardía de sus mesadas pensionales** y, con ello, hacer efectiva la garantía prevista en el artículo 53 de la Constitución Política con apego al cual uno de los principios mínimos fundamentales aplicables al trabajo es el de asegurar el pago oportuno y el reajuste periódico de las pensiones. Ello con la salvedad de algunos casos en los que, según la jurisprudencia, las entidades niegan administrativamente un determinado derecho pensional o definen su cuantía con amparo en el ordenamiento legal vigente y teniendo en cuenta que, finalmente, la obligación se produce por la aplicación de reglas jurisprudenciales relativas a la validez de algunas normas, **pero no es éste el caso que aquí se presenta en el que se acredita conforme el análisis efectuado en esta**

<sup>27</sup> Se comparte la decisión de calcular el retroactivo hasta el **31 de mayo de 2019**, porque la pensión se concedió a partir del 1 de julio de 2019. Pero al momento de realizar el cálculo se ha debido incluir un día debido a que se causó la pensión el 31 de mayo de 2019. Conforme a lo anterior se describe de la siguiente forma

**providencia**, que es la propia entidad quién con su error, omisión y tardanza genera el pago de un retroactivo tardío al señor **PABLO EMILIO LOPEZ**.

La Juez de instancia CONDENÓ a partir del **10 de agosto del 2017** y esta decisión será **MODIFICADA** porque si bien dadas las particularidades del caso concreto se efectúa la condena al retroactivo pensional desde el 11 de diciembre de 2015, lo cierto es que finalmente éste solo se reclama con la demanda que da origen a este proceso, notificada a COLPENSIONES el 9 de junio de 2021. El plazo consagrado en el **artículo 9 de la Ley 797 de 2003** para reconocer el retroactivo solicitado es de 4 meses, por lo que la causación de intereses inicia el **10 de octubre de 2021** e irá hasta la fecha del pago efectivo de las mesadas adeudadas según lo expuesto en la parte motiva de esta providencia.

## 7. COSTAS

Sobre las COSTAS, debe indicarse lo siguiente: **i)** En primera instancia se CONDENÓ en COSTAS a COLPENSIONES, decisión que se encuentra ajustada a derecho porque resultó vencida en el proceso en los términos del artículo 365 # 1 del Código General del Proceso. **ii)** Y respecto a las **costas en esta instancia**, al no prosperar el recurso de la entidad también se causan costas a su cargo, y se impondrán como agencias en derecho la suma de 3 S.M.M.L.V. Y al salir avante parcialmente el recurso del DEMANDANTE no se le causara costas.

## 8. DECISIÓN

En mérito de lo expuesto, La Sala Sexta del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Medellín, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley, decide:

**PRIMERO: CONFIRMAR** la sentencia proferida por la Juez Veinte Laboral del Circuito de Medellín, las siguientes MODIFICACIONES:

- El **numeral PRIMERO, porque se DECLARA** que el señor **PABLO EMILIO LOPEZ LOPEZ**, identificado con **C.C. 6337160** es acreedor del reconocimiento de pensión de vejez a partir del 03 de septiembre del año 2005, fecha para la cual Colpensiones declaró que adquiriría su estatus de pensionado, pero por el fenómeno prescriptivo se reconoce el retroactivo pensional desde el día **11 de diciembre de 2015 conforme** el análisis efectuado en la parte motiva.
- El **numeral SEGUNDO, porque** se CONDENA a COLPENSIONES al reconocimiento y pago del retroactivo pensional desde el **11 de diciembre de 2015** hasta el 31 de julio

de 2020 por la suma de **CINCUENTA Y DOS MILLONES CUATROCIENTOS CINCUENTA Y UN MIL CIENTO CINCUENTA Y NUEVE PESOS (\$52.451.159)**.

- El **numeral TERCERO**, porque **SE CONDENA** a Colpensiones a pagar los intereses moratorios consagrados en el art 141 de la ley 100 de 1993, a partir del **10 de octubre de 2021** y hasta la fecha en que se haga efectivo el pago del retroactivo, en virtud de lo definido en la parte motiva de esta providencia.

**SEGUNDO:** En esta instancia se causan costas a cargo de COLPENSIONES.

Se da por terminada la audiencia y se firma en constancia por quienes en ella intervinieron. Vencido el término de notificación se ordena devolver el expediente al juzgado de origen.

**Los Magistrados,**



**ANA MARÍA ZAPATA PÉREZ**



**JUAN DAVID GUERRA TRESPALACIOS**



**MARÍA PATRICIA YEPES GARCÍA**



**ANA MARÍA ZAPATA PÉREZ**

**Magistrada ponente**

**SALVAMENTO DE VOTO**

Con el respeto que debe imperar en este tipo de asuntos, me aparto de la decisión tomada por la Sala en segunda instancia al resolver dentro de proceso ordinario laboral promovido por PABLO EMILIO LÓPEZ LÓPEZ en contra de COLPENSIONES.

Para el efecto, es importante precisar que el punto concreto en el que me aparto de la decisión que adopta la sala, radica exclusivamente en la excepción de prescripción, y la manera como se resolvió al respecto dentro de la providencia, pues en lo demás me encuentro de acuerdo.

Con relación a este tópico, su regulación se desprende de los artículos 488 y 489 del CST, así como el 151 del CPTSS, que establecen un término prescriptivo de tres (3) años contabilizados a partir del momento a partir del cual se hace exigible el derecho, al predicar lo siguiente:

“Artículo 488. Regla general. Las acciones correspondientes a los derechos regulados en este Código prescriben en tres (3) años, que se cuentan desde que la respectiva obligación se haya hecho exigible, salvo en los casos de prescripciones especiales establecidas en el Código procesal del trabajo o en el presente estatuto..”.

Artículo 489. Interrupción de la prescripción. El simple reclamo escrito del trabajador, recibido por el empleador, acerca de un derecho debidamente determinado, interrumpe la prescripción por una sola vez, la cual principia a contarse de nuevo a partir del reclamo y por un lapso igual al señalado para la prescripción correspondiente.

“Artículo 151. Prescripción. Las acciones que emanen de las leyes sociales prescribirán en tres años, que se contarán desde que la respectiva obligación se haya hecho exigible. El simple reclamo escrito del trabajador, recibido por el patrono, sobre un derecho o prestación

debidamente determinado, interrumpirá la prescripción pero sólo por un lapso igual.”.

La presencia de la prescripción como figura jurídica extintiva de las obligaciones tiene fundamento en razones de buena fe y seguridad jurídica, puesto que resulta necesario demarcar límites temporales para el ejercicio de derechos que permanezcan sin reclamación oportuna, es decir, que no se sorprenda luego de un largo espacio temporal a un deudor con obligaciones que pueda desconocer o que recaigan en el por haberse subrogado.

Para el caso concreto del Sr. Pablo Emilio no se desconoce que hubo una inducción a error, en razón a que había causado el derecho pensional desde el año 2005, pero tampoco puede dejarse de considerar que se presentó una solicitud pensional en sede administrativa que se resolvió de manera negativa mediante Resolución GNR 393282 de 2015, por lo que a partir de ese momento se podía acudir a la judicatura para hacer valer el derecho que se estimaba existía, sin que se hubiere presentado alguna actuación, hasta que luego de cerca de cinco (5) años después se presentó una nueva solicitud en sede administrativa, es decir, una vez superado el término de prescripción trienal.

En este sentido, el planteamiento que se realiza por la Sala da a entender que no opera el fenómeno prescriptivo cuando se da una inducción a error, situación que no comparto en razón a que permite llegar al punto de considerar que en todos los eventos en que una solicitud, sea de carácter laboral o de la seguridad social, se resuelve en forma desfavorable al peticionario, impide que opere la prescripción aun cuando se reclame nuevamente tiempo después.

Tal es el caso de quien reclama una pensión de sobrevivientes, y se le dice que no tiene derecho por estimar un fondo que no probó una convivencia o una dependencia económica, aun cuando las exigencias estaban acreditadas, o en el evento en que dentro de una relación formalmente civil se pide al beneficiario del servicio que lo tenga como un verdadero contrato de trabajo y asuma el pago de las prestaciones sociales. En estos casos no se podrá hablar de una inducción a error al



impedirle acceder a un derecho, aun cuando años después, en sede judicial se determine que siempre existió?, no cabría entonces en esos eventos la prescripción?.

Lo propio ocurre cuando una persona pide que su pensión sea reliquidada, y obtiene una respuesta desfavorable a lo pretendido aun cuando verdaderamente procedía el reajuste. Allí esa respuesta errada de una entidad, no implicó que una persona creyera no tener derecho, a pesar de que si le asistía?. Es precisamente la situación que se dio en las sentencias CSJ 4331-2022, CSJ 825-2023 o CSJ SL1271-2023, ésta última donde se indicó lo siguiente:

Ahora, conforme a la información allegada por la Universidad de Antioquia, previo requerimiento de esta Corte, el hoy recurrente, como ya se indicó, se encuentra pensionado por la citada entidad educativa desde el 23 de diciembre de 2002, en cuantía inicial de \$1.183.244, cifra que, para ese entonces, no superaba el monto establecido en la Ley 4ª de 1976, es decir, cinco (5) veces el salario mínimo legal más alto.

Así pues, en el sub examine, teniendo en cuenta que el actor interpuso recurso de reposición y, en subsidio, de apelación contra el acto administrativo No. 221 del 30 de mayo de 2012, que negó la reliquidación pretendida, los cuales fueron resueltos por la Universidad demandada el 04 de julio de 2012 (impugnación horizontal) y el 12 de julio de esa anualidad (recurso de alzada), es claro que el término de prescripción quedó suspendido; pero como la demanda fue presentada sólo hasta el 28 de septiembre de 2017, esto es, por fuera del término trienal dispuesto legalmente para los derechos laborales y pensionales, resulta claro que las mesadas causadas con anterioridad al mes de septiembre de 2014 (CSJ SL1011-2021) quedaron afectadas por el fenómeno prescriptivo y, en consecuencia, se declarará parcialmente probada la excepción de prescripción propuesta por la aquí demandada, a quien se le ordenará pagar al demandante la suma de \$131.151.752,58 a título de diferencias pensionales (tomando como fecha de corte el 28 de febrero de 2023) más la indexación, debido a la evidente depreciación del valor adquisitivo de la moneda por el transcurso del tiempo, misma que deberá calcularse hasta tanto se haga efectivo su pago, de acuerdo con la siguiente fórmula:

[...]

Otro ejemplo bastante dicente de una inducción a error se encuentra cuando se presentaba solicitud de pensión bajo la sumatoria de tiempos públicos y privados, pero se obtenía respuesta negativa incluso con fundamento en la postura jurisprudencial de la época. Tampoco allí cabría la prescripción?.

En últimas, son muchos los casos en donde una negativa para reconocer un derecho en sede extrajudicial, implica que se induzca en error a una persona, dado que llega a considerar que realmente la prerrogativa reclamada no le asiste, pero no por ello se puede modificar el alcance de una norma procesal, que bajo su condición de pública, no es sujeta al arbitrio o querer de las partes.

En este sentido, volviendo al caso concreto, es claro que por la inducción en error de que fue objeto el demandante, no resultaba posible exigirle la desafiliación al sistema para acceder al disfrute de la prestación, precisamente porque los aportes adicionales se habían generado por negligencia de la entidad, pero no por ese motivo cabía dejar de aplicar la prescripción.

Precisado lo anterior, si bien no desconozco que la decisión mayoritaria encuentra sustento en valiosos argumentos, no por ello resulta posible desconocer los efectos de la prescripción, que para el caso concreto encontraría aplicabilidad, tal como lo estimó la *a quo*, por lo que realmente en este punto su decisión debía ser confirmada.

Fecha *ut supra*.

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Juan David Guerra Trespalcios', written in a cursive style.

**JUAN DAVID GUERRA TRESPALACIOS**